

## Nota Jurídica

OCTUBRE 2022

Joaquín Ruiz Echaury

### El tomador impropio y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2022

#### 1. Introducción

En una [anterior nota](#) de nuestro equipo examinamos la figura del conocido como «tomador impropio», la posición de la legislación española -la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (“LCS”) y los intentos de reforma de la misma- y del supervisor español, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), sobre este particular escenario donde el tomador, usualmente una persona jurídica, contrata un seguro colectivo por cuenta ajena, siendo asegurado un colectivo delimitado por una característica común a todos ellos, como ser trabajadores de una empresa, miembros de un colegio profesional o clientes del propio tomador. Vimos igualmente algunos de los errores y cuestiones más comunes que se presentan sobre esta figura -tales como considerarla «prohibida», o a quién corresponden en esos casos los distintos derechos que emanan del contrato de seguro, etc.-, y concluimos haciendo referencia a un asunto debatido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) en el caso C633/20 *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände –Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. vs TC Medical Air Ambulance Agency GmbH*, donde contábamos ya en mayo de 2022 con la posición del Abogado General ante el TJUE. Pues bien, el pasado 29 de septiembre de 2022, la Sala Primera del TJUE ha dictado finalmente [sentencia sobre este asunto C633/20](#), que pasamos a analizar en esta nota por su gran interés y relevancia práctica.

El debate en el caso en cuestión era si una empresa que concierta para sus clientes un seguro colectivo por el que se les cubren gastos de enfermedad, accidente y de retorno al domicilio en viajes nacionales e internacionales, percibiendo por ello una remuneración por cada cliente que voluntariamente se adhiere a la póliza, es o no es un mediador de seguros. El Abogado General se posicionó en torno a dos ideas:

(a) La primera, muy clara:

«[...] no parece que deban equipararse automáticamente los conceptos de “cliente” y de “tomador del seguro” y, sobre esta base, excluir en cualquier caso a la persona calificada por el Derecho nacional de seguros como “tomador del seguro” del círculo de personas que pueden ser “intermediario de seguros”».

Por tanto, el Abogado General se pronunció contra la posibilidad de que un tomador de un seguro colectivo que no abona primas por cuenta de los asegurados sea una figura que deba ser considerada proscrita bajo las normas de distribución de seguros de la Unión Europea.

(b) La segunda, algo más imprecisa: que pudiendo ese «tomador impropio» detentar tal posición de tomador en un contrato de seguro colectivo, no era menos cierto que debía ser considerada a la vez mediador de seguros a efectos de la normativa de aplicación -la Directiva 2016/97, de 20 de enero de 2016, de Distribución de Seguros (“DDS”)-.

## Legal Briefing

OCTOBER 2022

Joaquín Ruiz Echaury

### The improper policyholder and the Judgment of the Court of Justice of the European Union of 29 September 2022

#### 1. Introduction

In a previous [legal briefing](#) from our team, we examined the position of the “improper policyholder”, the approach of Spanish legislation - Law 50/1980, of 8 October 1980, on Insurance Contracts (“LCS”) and the attempts to reform it - and the stance of the Spanish regulator, the Directorate General of Insurance and Pension Funds (DGSFP), regarding this particular scenario where the policyholder, usually a legal entity, takes out a group insurance policy on behalf of others, with the insured being a group defined by a common characteristic, such as employment in a company, membership of a professional association or clients of the policyholder itself. We also looked at some of the most common errors and questions that arise regarding this position - such as considering it “prohibited”, or to whom the different rights arising from the insurance contract belong in such cases. We concluded by referring to a case before the Court of Justice of the European Union (“CJEU”), C633/20 *Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. v. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH*, in which the Advocate General’s position before the CJEU was already available in May 2022. On 29 September 2022, the First Chamber of the CJEU finally delivered its [judgment in case C633/20](#), which we analyse in this legal briefing due to its great interest and practical relevance.

In the case in question, the Court was asked whether a company which arranges group insurance for its clients to cover them for illness, accidents and repatriation expenses on national and international trips, and which receives remuneration for each client who takes out the policy, is an insurance intermediary or not. The Advocate General’s opinion was based on two issues:

(a) The first was very clear:

“[...] it does not appear that the concepts of ‘client’ and ‘policyholder’ should automatically be equated and, on that basis, excluding, in any event, the person described by national insurance law as a ‘policyholder’ from the circle of persons who may be ‘insurance intermediaries’”.

Therefore, the Advocate General ruled against the possibility that a policyholder of a group insurance policy who does not pay premiums on behalf of the insured persons can be considered a proscribed figure under the insurance distribution rules of the European Union.

(b) The second, somewhat more vague, was that although this “improper policyholder” could hold the position of policyholder in a group insurance contract, it was equally certain that it should also be considered an insurance intermediary for the purposes of the applicable legislation - the Insurance Distribution Directive 2016/97 of 20 January 2016 (“IDD”).

Concluimos nuestra nota del pasado mayo vaticinando que el TJUE seguiría el punto de vista del Abogado General y que habría una decisión -como ha sido el caso- en pocos meses, sobre la que podríamos extendernos respecto a los interrogantes abiertos en cuanto a problemas prácticos que presenta el tomador impropio.

## 2. Los razonamientos de la Sentencia del TJUE de 29 de septiembre de 2022

---

El TJUE destaca en el asunto (punto 41) la importancia del hecho de que el tomador impropio reciba una remuneración. El tomador impropio, dice el TJUE, «a cambio de dicha remuneración, (contribuye) a la obtención por terceros, en concreto sus clientes, de la cobertura de seguro prevista en el contrato que ha concluido con una compañía de seguros». Esa remuneración representa «un interés económico propio» para el tomador impropio, «distinto del interés de los adherentes en la obtención de las coberturas de seguro».

Respecto a la remuneración, que tiene gran importancia cuando en la práctica ésta reviste distintas formas (v.gr. participaciones en beneficios o resultado técnico), el TJUE (punto 42) alude a la «concepción amplia del concepto de “remuneración”» afirmando que «carece de relevancia» que el pago se produzca por los asegurados o no. El TJUE no examina en el caso si la remuneración puede proceder directamente de la aseguradora, pero la alusión a esta opción (con el ejemplo concreto de una comisión), sumada al resto de razonamientos de la sentencia, parece que ampara la flexibilidad respecto a quién y cómo se remunera al tomador impropio.

El TJUE pone en contexto (punto 43) la gran cantidad de posibles actividades alternativas que, bajo el prisma del artículo 2.1.3 de la DDS, amparan opciones de intervención en distribución de seguros. Lo que hace un tomador impropio, a la postre, cae en la definición de distribución de seguros (artículo 2.1.1 de la DDS), aludiendo la Sala a «los trabajos previos a la celebración» de contratos de seguro como un concepto amplio y que no tiene unos límites prefijados. En este sentido, el tomador impropio hace una actividad de distribución de seguros tanto por ser remunerado por ella como por la propia naturaleza del trabajo que desempeña. Para el TJUE es indiferente que la relación del tomador impropio con los asegurados tenga unos vínculos especiales fundados en una relación clientelar (en el caso, de agencia de viajes), pues su actividad al ofrecer la adhesión al contrato de seguro colectivo (punto 45) es «efectivamente, comparable a la actividad remunerada de un intermediario de seguros o de un distribuidor de seguros que tiene como finalidad la celebración de contratos de seguro entre tomadores de seguro y aseguradores que tienen por objeto la cobertura de determinados riesgos a cambio del abono de una prima». Añadiendo más razonamiento (punto 46) a esa dualidad entre «intermediario» y «distribuidor» de seguros, la Sala concluye que «en efecto, del mismo modo que la condición de distribuidor de seguros no es, conforme al artículo 2, apartado 1, punto 8, de la DDS, incompatible con la de asegurador, la condición de intermediario de seguros y, en consecuencia, de distribuidor de seguros no es incompatible con la de tomador del seguro».

Para el TJUE (punto 49), «el consumidor saldrá beneficiado si los productos de seguro se distribuyen a través de distintos canales e intermediarios con diferentes formas de cooperación con las empresas de seguros, siempre que tengan que aplicar normas similares en materia de protección del consumidor, y ello por razones que también tienen relación con la necesidad de establecer condiciones de competencia equitativas entre todos los intermediarios de seguros y distribuidores de seguros». Y es ahí dónde se pone el acento: bajo el principio de facilitar el acceso de los consumidores a los seguros, al tiempo que se les protege, el tomador impropio remunerado es posible, pero queda sujeto a «las obligaciones de obtener una licencia y de registrarse establecidas en la Directiva 2002/92 y la DDS, que tienen como finalidad garantizar que los intermediarios de seguros sean fiables y dispongan de los conocimientos necesarios en materia de mediación y asesoramiento sobre seguros, deben aplicarse de la misma forma a los actores económicos que ejercen esas actividades».

We concluded our legal briefing of last May by predicting that the CJEU would follow the Advocate General’s position and that there would be a decision - as has been the case - within a few months, regarding which we could expand upon the open questions concerning the practical problems presented by the improper policyholder.

## 2. Rationale of the judgment of the Court of Justice of the European Union of 29 September 2022

---

In point 41 of the judgment, the CJEU emphasised the importance of the improper policyholder receiving remuneration. The CJEU noted that the improper policyholder “in exchange for such remuneration, (contributes) to the obtaining by third parties, namely its clients, of the insurance cover provided for in the contract which it has concluded with an insurance company”. This remuneration represents “an economic interest of its own” for the improper policyholder, “distinct from the interest of the adherents in obtaining insurance cover”.

Regarding remuneration, which is of great importance when it takes different forms in practice (e.g., profit sharing), in point 42 of the judgment, the CJEU referred to the “broad understanding of the concept of ‘remuneration’”, stating that “it is irrelevant” whether the payment is made by the insured or not. The CJEU did not examine whether the remuneration can come directly from the insurer, but the allusion to this option (with the concrete example of a commission), together with the other grounds of the judgment, seems to support flexibility as to by whom and how the improper policyholder is remunerated.

In point 43 of the judgment, the CJEU placed into context the large number of possible alternative activities which, through the prism of Article 2.1.3 of the IDD, cover options for involvement in insurance distribution. What an improper policyholder does ultimately falls within the definition of insurance distribution (Article 2.1.1 of the IDD), with the Court referring to “work preparatory to the conclusion” of insurance contracts as a broad concept with no fixed limits. In this regard, the improper policyholder performs an insurance distribution activity both because it is remunerated for it and because of the very nature of the work it performs. For the CJEU, it is irrelevant whether the relationship between the improper policyholder and the insured has special links based on a client relationship (in this case, a travel agency relationship) since its activity in offering membership of the group insurance contract (point 45) is “effectively comparable to the paid activity of an insurance intermediary or insurance distributor whose function is to conclude insurance contracts between policyholders and insurers to cover certain risks in return for the payment of a premium”. In point 46 of the judgment, the Court commented further on this duality between insurance “intermediary” and “distributor”, by concluding that “just as the status of insurance distributor is not, under Article 2.1.8 of the IDD, incompatible with that of an insurer, the status of insurance intermediary and, consequently, of insurance distributor is not incompatible with that of policyholder”.

In point 49 of the judgment, the CJEU held that “the consumer will benefit if insurance products are distributed through different channels and intermediaries with different forms of cooperation with insurance undertakings, provided that they are required to apply similar consumer protection rules, and for reasons which also relate to the need to establish a level playing field between all insurance intermediaries and insurance distributors”. And the following is emphasised: under the principle of facilitating consumers’ access to insurance while protecting them, the remunerated improper policyholder is permitted but is subject to “the licensing and registration obligations established in Directive 2002/92 and the IDD, which aim to ensure that insurance intermediaries are reputable and have the necessary expertise in insurance mediation and advice and should apply equally to the economic actors carrying out these activities”.

Y esta es la gran conclusión de esta sentencia, según reza su fallo: «está comprendida en el concepto de intermediario de seguros» y, en consecuencia, en el de «distribuidor de seguros» de la DDS, una persona jurídica cuya actividad consiste en proponer a sus clientes que se adhieran, de forma voluntaria, a cambio de una remuneración que recibe de estos, a un seguro de grupo que previamente ha suscrito con una entidad aseguradora, adhesión que confiere a esos clientes el derecho a diversas prestaciones.

### 3. Dos reflexiones en torno a la sentencia

Pese a que el supuesto se refiere a seguros de adhesión voluntaria, en productos de adhesión obligatoria no se percibe cómo cabría interpretar que en ellos el tomador impropio debe considerarse prohibido, especialmente si se respetan las reglas sobre ventas cruzadas. El principio de que los productos de seguro lleguen al consumidor a través de distintos canales impregna la Sentencia del TJUE aquí analizada y, por tanto, hace perder valor a mayores debates sobre considerar al tomador impropio como «prohibido».

Una segunda conclusión que, sin duda, complica los esquemas de distribución mediante tomador impropio es su equiparación a la de distribuidores de seguros e intermediarios de seguros. Recordemos que la DDS, como nuestra normativa de transposición (el Real Decreto ley 3/2020, de 4 de febrero -RDL 3/2020-), distingue entre «distribuidor de seguros», que englobaría a los mediadores de seguros, a los mediadores de seguros complementarios y a las entidades aseguradoras, y «mediador de seguros», figura en la que encajan nuestros agentes, corredores y operadores de banca-seguros. El tomador impropio puede ser mediador de seguros o mediador de seguros complementario, pero difícilmente va a poder subsistir tras el fallo del TJUE como un pseudo-distribuidor de seguros sin encaje en el RDL 3/2020.

Este último punto tiene profundidad y genera debate: en esquemas donde un grupo empresarial aúna un mediador de seguros y un tomador impropio, que trabajan en colaboración (o complementaria o instrumentalmente) en la distribución a los asegurados, ¿cabe que mantengamos al tomador impropio como un no-mediador en la medida en que hay una protección al consumidor de seguros vía la intervención del mediador de seguros? ¿No parece el tomador impropio una figura a la medida de la definición de mediador de seguros complementarios? Es precisamente en esta última línea en la que pensamos que puede trabajarse con mayor seguridad: el fallo del TJUE no analiza este supuesto porque nadie se lo plantea, pero desde luego no lo excluye. Otra línea de trabajo sería el explorar, en el caso de España, si el tomador impropio puede simplemente ser colaborador externo, pero la naturaleza nacional de esta figura y el hecho de que el RDL 3/2020 indique claramente que no son mediadores de seguros (artículo 137.1) complica notablemente tal combinación, como ya indicamos en nuestra nota de mayo pasado.

The main conclusion of this judgment is that a legal entity whose activity consists of offering its clients the opportunity to voluntarily take out, in return for remuneration from them, a group insurance policy that it has previously taken out with an insurance company, and which confers on those clients the right to various benefits, falls within the definition of “insurance intermediary” and, consequently, within that of “insurance distributor” of the IDD.

### 3. Two reflections on the judgment

Although the case concerns voluntary insurance, in relation to compulsory products, it is unclear how it could be interpreted that the improper policyholder should be considered prohibited, especially if the rules on cross-selling are respected. The principle that insurance products reach the consumer through different channels permeates the CJEU judgment under discussion here and thus detracts from further discussion on whether the improper policyholder should be considered “prohibited”.

A second conclusion that undoubtedly complicates the improper policyholder distribution schemes is their being equated with insurance distributors and insurance intermediaries. It must be noted that the IDD, like the transposing legislation (Royal Decree law 3/2020, of 4 February - RDL 3/2020), distinguishes between “insurance distributors”, which would include insurance intermediaries, complementary insurance intermediaries and insurance entities, and “insurance intermediaries”, which includes our agents, brokers and bancassurance operators. The improper policyholder may be an insurance intermediary or a complementary insurance intermediary, but it is unlikely to survive after the CJEU’s conclusion that it can be considered a pseudo-insurance distributor with no place in RDL 3/2020.

This last point is profound and provokes debate: in schemes where a business group brings together an insurance intermediary and an improper policyholder, who work collaboratively (or complementarily or instrumentally) in the distribution to policyholders, is it appropriate to keep the improper policyholder as a non-intermediary in circumstances where there is insurance consumer protection through the involvement of the insurance intermediary? Doesn’t the improper policyholder seem to fit the definition of a complementary insurance intermediary? It is precisely in this last line that we think it is possible to work with greater certainty: the CJEU judgment does not examine this scenario because no one is considering it, but it certainly does not exclude it. Another approach would be to explore, in the case of Spain, whether the improper policyholder can simply be an external collaborator, but the national scope of this role and the fact that RDL 3/2020 clearly states that they are not insurance intermediaries (Article 137.1) considerably complicates such a combination, as we pointed out in our note last May.

## CONTACTO | CONTACT



**Joaquín Ruiz Echaury**

Socio de Seguros y Reaseguros / Partner, Insurance and Reinsurance

jruiz-echaury@perezllorca.com

T: +34 91 432 51 58

[www.perezllorca.com](http://www.perezllorca.com) | Madrid | Barcelona | London | New York | Brussels

La información contenida en esta Nota Jurídica es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico.

Este documento ha sido elaborado el 6 de octubre de 2022 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido.

The information contained in this Legal Briefing is of a general nature and does not constitute legal advice.

This document was prepared on 6 October 2022 and Pérez-Llorca does not assume any commitment to update or revise its contents.